Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México, de catorce de agosto de dos mil veinticuatro.

**VISTO** el expediente electrónico formado con motivo del recurso de revisión número **02240/INFOEM/IP/RR/2024,** interpuesto por “**XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX**”, en lo sucesivo la parte **Recurrente**, en contra de la respuesta del **Fiscalía General de Justicia del Estado de México**, en lo subsecuente el **Sujeto Obligado**, se procede a dictar la presente resolución.

**A N T E C E D E N T E S D E L A S U N T O**

**PRIMERO.** **De la Solicitud de Información.**

Con fecha veintidós de marzo de dos mil veinticuatro, el **Recurrente** presentó a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (**SAIMEX)** ante **El Sujeto Obligado**, solicitud de acceso a la información pública, registrada bajo el número de expediente **00321/FGJ/IP/2024,** mediante la cual solicitó información en el tenor siguiente:

“EN RELACIÓN CON LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES DE LA FISCALÌA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, SOLICITO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 1. CUÁLES SON LOS REQUISITOS LEGALES Y ACADÉMICOS PARA EL INGRESO Y PERMANENCIA EN EL SERVICIO, DE LOS PERITOS OFICIALES EN MATERIA DE TRANSITO TERRESTRE. 2. CUÁL ES EL MARCO JURÍDICO, NORMATIVO Y REGLAMENTARIO EN EL QUE SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS PARA EL INGRESO Y PERMANENCIA DE UN SERVIDOR PÚBLICO CON FUNCIONES DE PERITO OFICIAL EN MATERIA DE TRÁNSITO TERRESTRE. 3. SE INFORME SI EL C. XXXXXXXX XXXXX XXXX CUENTA CON NOMBRAMIENTO OFICIAL PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE PERITO OFICIAL EN MATERIA DE TRÁNSITO TERRESTRE, EN CASO DE SER ASÌ, SOLICITO COPIA DEL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE. 3. SOLICITO COPIA DEL EXPEDIENTE PERSONAL DEL C. XXXXXXXX XXXXX XXXX QUE SE TENGA RESGUARDADO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE. 4. SOLICITO COPIA DEL DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE EL C. XXXXXXXX XXXXX XXXX CUENTA CON LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES PARA DESEMPEÑARSE COMO PERITO OFICIAL EN MATERIA DE TRÁNSITO TERRESTRE ADSCRITO A LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES, DE LA FISCALÌA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO.” (Sic)

**Modalidad de entrega:** A través del SAIMEX.

**SEGUNDO. De la respuesta a la solicitud o entrega de información.**

De las constancias que obran en el expediente electrónico, se advierte que el día **diecinueve de abril de dos mil veinticuatro**, el **Sujeto Obligado** dio respuesta a la solicitud de información en los siguientes términos:

*“En respuesta a la solicitud recibida, nos permitimos hacer de su conocimiento que con fundamento en el artículo 53, Fracciones: II, V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, le contestamos que:*

*se adjunta respuesta Asimismo, se hace de conocimiento que de conformidad con el artículo 178 de la Ley de la materia, podrá inconformarse de la respuesta otorgada, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios electrónicos, a través del recurso de revisión, presentado ante el INFOEM o esta Unidad de Transparencia, dentro de los quince días hábiles, siguientes a la fecha de la notificación de presente respuesta. “(Sic).*

Adicionalmente, el Sujeto Obligado adjuntó los archivos electrónicos denominados “***OFICIO NÚMERO 01401-MAIP-FGJ-2024.pdf” y “Acuerdo clasificación sol 321.pdf”,*** mismos que no se reproducen por ser del conocimiento de las partes, sin embargo, será materia de estudio en el considerando respectivo.

**TERCERO. Del recurso de revisión.**

Inconforme con la respuesta notificada por **El Sujeto Obligado,** el **Recurrente** interpuso recurso de revisión, en fecha **veinticinco de abril de dos mil veinticuatro**, el cual fue registrado en el sistema electrónico con el expediente número **02240/INFOEM/IP/RR/2024;** en los cuales arguye las siguientes manifestaciones:

1. ***Acto impugnado***

“EL OFICIO DE RESPUESTA EMITIDO POR EL SUJETO OBLIGADO Y EL ACUERDO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA” (sic)

1. ***Razones o motivos de inconformidad***

“LAS RAZONES QUE SE MANIFIESTAN EN EL OFICIO Y ACUERDO DE RESERVA DE INFORMACIÓN, SON IMPROCEDENTES PORQUE EL CARGO DE PERITO NO SE INCLUYE DENTRO DE LOS SUPUESTOS DE EXEPCIÓN PARA PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN. SIN EMBARGO, CON LA FINALIDAD DE COADYUVAR CON LA FISCALÍA DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, SOLICITO QUE SE ME PROPORCIONE ÚNICAMENTE EL NOMBRAMIENTO VIGENTE DEL SERVIDOR PÚBLICO SEÑLADO EN LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN, O BIEN, SE INDIQUE SI CUENTA CON NOMBRAMIENTO VIGENTE PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES DE PERITO.” (sic)

**CUARTO. Del turno y admisión del recurso de revisión.**

El medio de impugnación fue turnado al Comisionado Presidente **José Martínez Vilchis,** por medio del sistema electrónico SAIMEX, en términos del artículo 185, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de México y Municipios, del cual recayó acuerdo de **admisión** en fecha **treinta de abril de dos mil veinticuatro**, determinándose en ellos, un plazo de siete días para que las partes manifestaran lo que a su derecho corresponda en términos del numeral ya citado.

**QUINTO. De la etapa de instrucción.**

De las constancias que obran en el expediente electrónico del SAIMEX, se advierte que el **Sujeto Obligado** rindió su informe justificado en fecha veintidós de mayo de dos mil veinticuatro, por medio del archivo electrónico “***acta sesion ordinaria 04.pdf”, “OFICIO I.J. RR 2240 SOL- 321 OF 1724\_2024.pdf” y “I.J. RR 2240 SOL- 321 OF 1725\_2024.pdf”***, el cual fue puesto a la vista en fecha trece de junio del mismo año. De igual manera, la parte Recurrente rindió sus manifestaciones en fecha diecinueve de junio del año en curso.

Así mismo, se aprecia que no se llevaron a cabo audiencias durante la sustanciación del recurso de revisión, ni se ofrecieron pruebas por parte del **Recurrente**; todo lo anterior en términos de los artículos 185 fracciones II y IV, y 195 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**SEXTO. De la ampliación del término para resolver.**

De las constancias que integran el expediente electrónico, se advierte que han transcurrido los términos de Ley, para la emisión de la resolución en el presente recurso de revisión, por lo que en fecha **trece de junio de dos mil veinticuatro**, se notificó a las partes el acuerdo por el que se ordena ampliar el plazo para la emisión de la resolución, en términos del artículo 181 párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, ordenándose turnar los expedientes a la resolución que en derecho proceda.

Este organismo garante no pasa por alto justificar, que el plazo para emitir resolución en el presente asunto encuentra justificación en el alto número de recursos de revisión recibidos, que se ha incrementado aproximadamente un 400%, circunstancia atípica que ha rebasado las capacidades técnicas y humanas del personal encargado de la proyección de las resoluciones a dichos medios de impugnación.

Por ello, es menester precisar que si bien se ha excedido el plazo para resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con la ley de la materia, el plazo para emitir resolución se encuentra justificado en los elementos para medir su razonabilidad de asuntos conforme a los parámetros establecidos por diversos órganos jurisdiccionales federales, aplicables también en procedimientos análogos, como el que nos ocupa.

Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración la dilación total del procedimiento; esto es, en un plazo razonable.

En ese sentido, el legislador fijó los términos procesales en las leyes, de manera general, sin que pudiera prever la variada gama de casos que son resueltos por los órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que conocen.

Por ello, excepcionalmente, si un asunto es resuelto con posterioridad a los plazos señalados por la norma debe analizarse la razonabilidad del tiempo necesario para su resolución, atentos a los siguientes criterios:

**a) Complejidad del asunto:** La complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales, el tiempo transcurrido, las características y contexto del recurso.

**b) Actividad Procesal del interesado:** Acciones u omisiones del interesado.

**c) Conducta de la Autoridad:** Las Acciones u omisiones realizadas en el procedimiento. Así como si la autoridad actuó con la debida diligencia.

**d) La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso:** Violación a sus derechos humanos.

De modo que, cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien, cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional o cuasi jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que es una excluyente de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario, como ha acontecido en el caso que nos ocupa.

Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro “TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO.”, visible en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.

Razones por las cuales cabe concluir que, la resolución al recurso de revisión se solventa hasta esta fecha, debido a que existe una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad de los recursos materiales y humanos con que cuenta este Instituto para atender la enorme demanda de usuarios que acuden para que se les garantice su Derecho de acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, aunado a la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente, la extensión de los escritos y pruebas aportadas y desahogadas por las partes; lo que impide la tramitación de los recursos dentro de los términos legales previamente establecidos por la Ley, por tratarse de causas de fuerza mayor.

Al respecto, también son de considerar los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubros y datos de identificación son los siguientes:

“**PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO**.” consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002351.

“**PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.**”, visible en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002350.

Por ello, este organismo garante comprometido con la tutela de los derechos humanos confiados, señala que este exceso del plazo legal para resolver el presente asunto, resulta de carácter excepcional.

**SÉPTIMO. Del Cierre de Instrucción.**

Por lo que una vez transcurrido el periodo otorgado a las partes de siete días hábiles para realizar sus manifestaciones en el acuerdo de admisión, y no habiendo prueba pendiente por desahogar, ni que documentos que integrar al expediente electrónico, se decretó el cierre de instrucción en fecha **catorce de agosto de dos mil veinticuatro**, en términos del artículo 185 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, ordenándose turnar el expediente a la resolución que en derecho proceda.

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. De la competencia**.

Este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión interpuesto por **la parte recurrente** conforme a lo dispuesto en los artículos 1, párrafos segundo y tercero, 6, apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, párrafos trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones IV y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 1, 2 fracción II, 13, 29, 36 fracciones I y II, 176, 178, 179, 181 párrafo tercero y 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; y 6, 9 fracciones I y XXIII, y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

**SEGUNDO. Sobre los alcances del recurso de revisión.**

Derivado de la impugnación realizada, es preciso e importante señalar que el recurso de revisión inmerso en la Ley de Transparencia vigente en la entidad, tiene el fin y alcance que señalan los numerales 176, 179, 181 párrafo cuarto, 194 y 195 y demás aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios vigente, el cual será analizado conforme a las actuaciones que obren en el expediente electrónico, con la finalidad de reparar cualquier posible afectación al derecho de acceso a la información pública y garantizando el principio rector de máxima publicidad.

**TERCERO. De las causas de improcedencia.**

En el procedimiento de acceso a la información y de los medios de impugnación de la materia, se advierten diversos supuestos de procedibilidad, los cuales deben estudiarse con la finalidad de dar cumplimiento a los principios de legalidad y objetividad inmersos en el artículo 9 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en correlación con la seguridad jurídica que debe generar lo actuado ante este Organismo garante.

Siendo facultad de este Órgano entrar al estudio de las causas de improcedencia que hagan valer las partes o que se adviertan de oficio por este Resolutor y por ende objeto de análisis previo al estudio de fondo del asunto, en los presupuestos procesales sobre el inicio o trámite de un proceso, generando eficacia jurídica en las resoluciones, máxime que se trata de una figura procesal adoptada en la ley de la materia, la cual impide su estudio y resolución cuando una vez admitido el recurso de revisión se advierta una causa de improcedencia que permita sobreseer el recurso de revisión, sin estudiar el fondo del asunto; circunstancias anteriores que no son incompatibles con el derecho de acceso a la justicia, ya que éste no se coarta por regular causas de improcedencia y sobreseimiento con tales fines[[1]](#footnote-1). Así las cosas, del análisis de los expedientes electrónicos no se advierte ninguna causa de improcedencia que se actualice ni mucho menos alguna hecha valer por alguna de las partes, procediendo al estudio del fondo del asunto, en los siguientes términos.

**CUARTO. Estudio y resolución del asunto**

El análisis y resolución del presente recurso, se funda en el contenido íntegro de las actuaciones que obran en el expediente electrónico, para así estar en posibilidad este Órgano Colegiado de dictar el fallo correspondiente conforme a derecho, tomando en consideración los elementos aportados por las partes y respetando en todo momento al principio de máxima publicidad consagrado en nuestra Constitución Federal, Local y demás leyes aplicables en la materia, así como en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, en concordancia con el párrafo tercero del artículo 1 de la Constitución Federal y el diverso 8 de la Ley de Transparencia local.

Bajo estas líneas argumentativas, al retomar y delimitar los requerimientos del ahora **Recurrente**, de manera objetiva se precisa que requiere la siguiente información:

1. Cuáles son los requisitos legales y académicos para el ingreso y permanencia en el servicio, de los peritos oficiales en materia de tránsito terrestre.
2. Cuál es el marco jurídico, normativo y reglamentario en el que se establecen los requisitos para el ingreso y permanencia de un servidor público con funciones de perito oficial en materia de tránsito terrestre.
3. Se informe si el C. XXXXXXX XXXXX XXXX cuenta con nombramiento oficial para desempeñar el cargo de perito oficial en materia de tránsito terrestre, en caso de ser así, solicito copia del nombramiento correspondiente.
4. Solicito copia del expediente personal del C. XXXXXXX XXXXX XXXX que se tenga resguardado en la unidad administrativa correspondiente.
5. Solicito copia del documento que acredite que el C. XXXXXXX XXXXX XXXX cuenta con los estudios técnicos y profesionales para desempeñarse como perito oficial en materia de tránsito terrestre adscrito a la coordinación general de servicios periciales, de la Fiscalía General De Justicia Del Estado De México.

De conformidad con las constancias que obran en el expediente electrónico, se observa que el **Sujeto Obligado** dio respuesta por medio del sistema SAIMEX, a la solicitud de información **00321/FGJ/IP/2024;** a través de los archivos electrónicos**:**

1. ***OFICIO NÚMERO 01401-MAIP-FGJ-2024.pdf:*** constante de dos fojas, en formato pdf, contiene el oficio número 01401/MAIP/FGJ/2024, de fecha dieciocho de abril de dos mil veinticuatro, firmado por la Titular de la Unidad de Transparencia, en el que refiere lo siguiente:

“(…)

Sobre el particular, de conformidad con el artículo 162, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, la solicitud de información referida, fue turnada a las áreas componentes de esta Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que conforme a sus facultades y atribuciones pudiesen contar con lo solicitado.

Al respecto, esta Fiscalía General, con fundamento en los articulo 1,4 y 163, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, hace de conocimiento que la Dirección de Reclutamiento, Selección de Personal y Desarrollo Organizacional, respecto de los cuestionamientos 1 y 2, informó que los requisitos legales para el ingreso y permanencia del personal operativo con categoría de peritas o peritos se establecen en lo dispuesto en el artículo 7 fracción VI de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículo 8 fracción V de la Ley de Seguridad del Estado de México, así como los artículos 14 y 16 de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Así mismo, por cuanto hace a los numerales **3,** 3 (bis) y 4, la **Dirección de Administración de Personal y Nómina comunicó** que de la búsqueda exhaustiva realizada en la plantilla del personal operativo **no localizó a la persona referida;** así mismo, informó la clasificación del pronunciamiento respecto de la búsqueda en la plantilla del personal operativo toda vez que corresponde a información de carácter RESERVADA, de conformidad con lo establecido en el artículo 140, fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

En virtud de lo anterior, en la Sesión Ordinaria 04/2024, del diez de abril de dos mil veinticuatro, el Comité de Transparencia confirmó la clasificación de la información solicitada como información RESERVADA. Se adjunta a la presente el Acuerdo SO/04/2024/06 derivado de la sesión en comento.

(…)” (Sic)

1. ***Acuerdo clasificación sol 321.pdf:*** constante de dieciséis fojas, en formato pdf, contiene el Acuerdo de Clasificación de Información, firmado por la Titular de la Unidad de Transparencia.

Es así como, derivado de la respuesta emitida por **El Sujeto Obligado**, **el Recurrente**, interpuso el presente recurso de revisión, señalando sustancialmente como sus razones o motivos de inconformidad, lo siguiente:*“LAS RAZONES QUE SE MANIFIESTAN EN EL OFICIO Y ACUERDO DE RESERVA DE INFORMACIÓN, SON IMPROCEDENTES PORQUE EL CARGO DE PERITO NO SE INCLUYE DENTRO DE LOS SUPUESTOS DE EXEPCIÓN PARA PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN. SIN EMBARGO, CON LA FINALIDAD DE COADYUVAR CON LA FISCALÍA DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO,* ***SOLICITO QUE SE ME PROPORCIONE ÚNICAMENTE EL NOMBRAMIENTO VIGENTE DEL SERVIDOR PÚBLICO SEÑLADO EN LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN, O BIEN, SE INDIQUE SI CUENTA CON NOMBRAMIENTO VIGENTE PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES DE PERITO****.” (Sic).*

En primer lugar, es de señalar que de los motivos de inconformidad en cita se aprecia que el particular únicamente se inconforma sobre el nombramiento del servidor público referido en la solicitud, o si cuenta con nombramiento, sin que se aprecie inconformidad alguna respecto a los otros puntos.

Sirve de sustento, la tesis jurisprudencial número VI.3o.C. J/60, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta bajo el número de registro 176,608 que a la letra dice:

***“ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO IDÓNEO.*** *Debe reputarse como consentido el acto que no se impugnó por el medio establecido por la ley, ya que, si se hizo uso de otro no previsto por ella o si se hace una simple manifestación de inconformidad, tales actuaciones no producen efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado en amparo, lo que significa consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz.”*

De la interpretación del criterio antes citado, se advierte que cuando el particular impugnó la respuesta del **SUJETO OBLIGADO**, no expresó razón o motivo de inconformidad en contra de todos los rubros solicitados, por tanto, estos deben declararse atendidos.

Atento a ello, es importante traer a contexto la Tesis Jurisprudencial Número 3ª./J.7/91, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta bajo el número de registro 174,177, que establece lo siguiente:

***“REVISIÓN EN AMPARO. LOS RESOLUTIVOS NO COMBATIDOS DEBEN DECLARARSE FIRMES.*** *Cuando algún resolutivo de la sentencia impugnada afecta a la recurrente, y ésta no expresa agravio en contra de las consideraciones que le sirven de base, dicho resolutivo debe declararse firme. Esto es, en el caso referido, no obstante que la materia de la revisión comprende a todos los resolutivos que afectan a la recurrente, deben declararse firmes aquéllos en contra de los cuales no se formuló agravio y dicha declaración de firmeza debe reflejarse en la parte considerativa y en los resolutivos debe confirmarse la sentencia recurrida en la parte correspondiente.”*

Para mayor abundamiento, también resulta aplicable el criterio 01/20 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que a la letra estipula lo siguiente:

**Actos consentidos tácitamente. Improcedencia de su análisis**. Si en su recurso de revisión, la persona recurrente no expresó inconformidad alguna con ciertas partes de la respuesta otorgada, se entienden tácitamente consentidas, por ende, no deben formar parte del estudio de fondo de la resolución que emite el Instituto.

Por lo que, al no haberse inconformado sobre todos los rubros solicitados, se consideran actos consentidos y, por tanto, se tienen por colmados dichos rubros de la solicitud.

Asimismo, en la etapa de manifestaciones se advierte que el **Sujeto Obligado** rindió su informe justificado mediante los archivos electrónicos denominados:

1. ***OFICIO I.J. RR 2240 SOL- 321 OF 1724\_2024.pdf:*** constante de una foja, en formato pdf, contiene el oficio número 1724/MAIP/FGJ/2024, de fecha trece de mayo de dos mil veinticuatro, firmado por la Titular de la Unidad de Transparencia, en el que sustancialmente remite su informe justificado por medio de los archivos siguientes.
2. ***acta sesion ordinaria 04.pdf:*** constante de setenta y ocho fojas, en formato pdf, contiene el Acta de la Sesión Ordinaria Número 04/2024, celebrada el diez de abril de dos mil veinticuatro.
3. ***I.J. RR 2240 SOL- 321 OF 1725\_2024.pdf”***: constante de ocho fojas, en formato pdf, contiene el oficio número 1725/MAIP/FGJ/2024, de fecha trece de mayo de dos mil veinticuatro, firmado por la Titular de la Unidad de Transparencia, en el que refiere lo siguiente:

“(…)

Ahora bien, en cuanto a:

 SOLICITO QUE SE ME PROPORCIONE ÚNICAMENTE EL NOMBRAMIENTO VIGENTE DEL SERVIDOR PÚBLICO SEÑLADO EN LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN, O BIEN, SE INDIQUE SI CUENTA CON NOMBRAMIENTO VIGENTE PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES DE PERITO.”

Al respecto, se insiste en señalar que, al no encontrar dato alguno respecto al “SERVIDOR PÚBLICO” en la información del personal administrativo¸ este Sujeto obligado se encuentra imposibilitado a pronunciarse sobre el personal operativo, toda vez que, como ya se ha planteado, realizar una búsqueda en la plantilla de personal operativo para efectuar un pronunciamiento, implica un riesgo real, demostrable e identificable con relación al interés público. En virtud de lo anterior no es posible proporcionar información conforme al interés del particular.

**CUARTO. –** Ahora bien, en cuanto a la información restante proporcionada en la respuesta primigenia, el particular no manifestó inconformidad alguna, es así que debe entenderse por consentida consecuentemente, es decir, no deben formar parte del estudio de fondo de la Resolución de ese Órgano Garante, entendiéndose así si consentimiento respecto de la misma.

(…)” (Sic)

Por otro lado la parte Recurrente, en el apartado de manifestaciones adjunto el archivo electrónico denominado “MANIFESTACIÓ N PARA CONCILIAR.docx”, en el que refiere lo siguiente:

“En al asunto que originó la radicación del expediente del recurso de revisión por este medio **expreso mi voluntad de conciliar en el asunto que nos ocupa, solicitando la apertura de la etapa de conciliación y se señale fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación entre las partes.**

Por lo anterior, solicito que se dicte acuerdo en el que se señale fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación y que se me notifique oportunamente.

ATENTAMENTE

FRANCISCO FUENTES CARBAJAL”(Sic)

De lo anterior, es necesario hacer del conocimiento al Recurrente que en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de México y Municipios no establece la figura de la “Conciliación”, razón por la que dicha etapa no fue abierta.

Para delimitar esferas competenciales, resulta oportuno analizar el Organigrama del Sujeto Obligado, por lo que es necesario traer a colación la siguiente imagen:



De lo anterior, se tiene que el Sujeto Obligado cuenta con diversas unidades administrativas, siendo de nuestro interés la Dirección de Administración de Personal y Nómina, misma que depende de la Dirección General de Administración.

 En virtud de lo anterior, el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en sus artículos:

**Atribuciones de la Dirección General de Administración**

Artículo 35. Al frente de la Dirección General de Administración habrá un Director General, quien se auxiliará de las unidades administrativas y servidores públicos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, de acuerdo con las disposiciones legales en la materia.

Corresponde a la Dirección General de Administración las atribuciones siguientes;

IX. **Integrar los expedientes de los servidores públicos y tramitar la expedición de nombramientos**, autorización de licencias, cambios de adscripción, hojas de servicio, bajas, credenciales, constancias, diplomas y todos los demás documentos que deban ser integrados en los mismos, estableciendo el sistema de registro;

Artículo 45. Los resultados de las evaluaciones de ingreso deberán mantenerse en reserva; salvo lo dispuesto en la Ley General del Sistema y otras disposiciones jurídicas. Reunidos los requisitos, aprobados los exámenes y las evaluaciones, así como realizado el examen de control de confianza, el Procurador seleccionará a quienes ingresarán al servicio de la Procuraduría y procederá a la designación o nombramiento respectivo.

…

Así la ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, establece lo siguiente:

Artículo 2. Para los efectos aplicación e interpretación de esta Ley se entiende por:…

 **VIII. Personal Operativo**: a las y los agentes del Ministerio Público, Policía de Investigación, las y los orientadores jurídicos, las y los facilitadores de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal y **servicios periciales**.

De lo anterior, y por lo que hace al Acuerdo de Reserva enviado mediante Informe Justificado, este Instituto resalta que, si bien, por regla general, toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública, debemos considerar que también hay excepciones, es decir, que se trate de información clasificada (confidencial o reservada), en cuyo caso, se restringirá, excepcionalmente, el acceso conforme a lo señalado en la ley en la materia; entendiendo a esta información, de conformidad con el artículo 3, fracciones XXI, XXIII y XXIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de la siguiente manera:

* **Información confidencial:** Se considera como información confidencial los **secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.**
* **Información privada:** La contenida en documentos públicos o privados que refiera a la vida privada y/o los datos personales, que no son de acceso público.
* **Información reservada:** La clasificada con este carácter de manera temporal por las disposiciones de esta Ley, cuya divulgación puede causar daño en términos de lo establecido por esta Ley.

En resumen, se determina que, excepcionalmente, la información pública, podrá ser clasificada como reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos de las causas legítimas y estrictamente necesarias previstas por la Ley de Transparencia; **así como confidencial, tratándose principalmente de aquella que refiera a la información privada y datos personales concernientes a una persona física.**

En virtud de lo anterior, se desprende que los Acuerdos de Reserva deberán de cumplir parámetros de forma y fondo, los cuales se abordan a continuación:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Cumplió:** | **Contenido** |
| **Número de folio de la solicitud** | **Sí** |  |
| **Referencia de la información solicitada** | **No** |  |
| **Causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, vinculándola con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter de información reservada** | **Parcialmente** |  |
| **Fundamento y Motivación Legal** | **No**Las causales de reserva referidas en el acta del Comité de Transparencia **(140, fracción XI)** y la prueba de daño **(140, fracción IV)** resultan diversas |  |
| **Conexión entre los fundamentos y motivos que dieron origen a la Reserva de la información** | **Parcialmente** |  |
| **Prueba de Daño** |
| **Riesgo Real, Demostrable e Identificable****(Modo, Tiempo y Lugar)** | **Parcialmente** |  |
| **Temporalidad de la Reserva de la información** | **Sí** |  |
| **Autoridades competentes.** | **Sí** |  |

Ahora bien, quedando establecido lo anterior, este Órgano Garante considera viable realizar el estudio en aras de establecer si la respuesta e informe justificado del Sujeto Obligado colma la pretensión del Recurrente, así como calificar los motivos de inconformidad del particular.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Requerimientos*** | ***Respuesta*** | ***Colma*** |
| Cuáles son los requisitos legales y académicos para el ingreso y permanencia en el servicio, de los peritos oficiales en materia de tránsito terrestre | la Dirección de Reclutamiento, Selección de Personal y Desarrollo Organizacional, respecto de los cuestionamientos 1 y 2, informó que los requisitos legales para el ingreso y permanencia del personal operativo con categoría de peritas o peritos se establecen en lo dispuesto en el artículo 7 fracción VI de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículo 8 fracción V de la Ley de Seguridad del Estado de México, así como los artículos 14 y 16 de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México | *Si**Actos consentidos*  |
| Cuál es el marco jurídico, normativo y reglamentario en el que se establecen los requisitos para el ingreso y permanencia de un servidor público con funciones de perito oficial en materia de tránsito terrestre |
| Se informe si el C. XXXXX XXXX XXXX cuenta con nombramiento oficial para desempeñar el cargo de perito oficial en materia de tránsito terrestre, en caso de ser así, solicito copia del nombramiento correspondiente | la **Dirección de Administración de Personal y Nómina comunicó** que de la búsqueda exhaustiva realizada en la plantilla del personal administrativo **no localizó a la persona referida**Respecto a Acuerdo de reserva se tiene que no cumple con los requisitos establecidos.  | *Parcialmente* |
| Solicito copia del expediente personal del C. XXXXXX XXXX XXXX que se tenga resguardado en la unidad administrativa correspondiente | La **Dirección de Administración de Personal y Nómina comunicó** que de la búsqueda exhaustiva realizada en la plantilla del personal operativo **no localizó a la persona referida** | *Si**Actos consentidos*  |
| Solicito copia del documento que acredite que el C. XXXXXX XXXX XXXX cuenta con los estudios técnicos y profesionales para desempeñarse como perito oficial en materia de tránsito terrestre adscrito a la coordinación general de servicios periciales, de la Fiscalía General De Justicia Del Estado De México | La **Dirección de Administración de Personal y Nómina comunicó** que de la búsqueda exhaustiva realizada en la plantilla del personal administrativo **no localizó a la persona referida** | *Si**Actos consentidos* |

De ahí que deba arribarse a la premisa de que **El Sujeto Obligado** clarificó que en el personal administrativo no encontró información de la persona referida en la solicitud, resultaría innecesaria una declaratoria de inexistencia en términos de 19, 169 y 170 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, y ante un hecho negativo resulta aplicable la siguiente tesis:

 ***“HECHOS NEGATIVOS, NO SON SUSCEPTIBLES DE DEMOSTRACION.***

*Tratándose de un hecho negativo, el Juez no tiene por qué invocar prueba alguna de la que se desprenda, ya que es bien sabido que esta clase de hechos no son susceptibles de demostración.”* ***[Sic]***

Ahora bien, este Órgano Garante una vez hecho el análisis de la información solicitada por el hoy recurrente, considera que, la entrega de la misma **compromete la seguridad pública**, además de que pone en **riesgo la vida, la seguridad o la salud de una persona física**, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables por lo que es correcta su clasificación como información **RESERVADA**, de acuerdo a lo establecido en los artículos 91 y 140, fracciones I, y IV, de la Ley de Transparencia Estatal, que a la letra establecen lo siguiente:

***Artículo 91.*** *El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando ésta sea clasificada como reservada o confidencial.*

***Artículo 140.*** *El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando por razones de interés público, ésta sea clasificada como reservada, conforme a los criterios siguientes:*

*(…)*

***I.*** *Comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;*

*(…)*

***IV. Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de una persona física;***

Es así que, si bien es cierto el derecho de acceso a la información pública se satisface en aquellos casos en que se entregue el soporte documental en que conste la información requerida, también lo es que el derecho de acceso a la información pública puede ser restringido cuando se trate de información clasificada como **RESERVADA**, delimitando una serie de hipótesis de hecho en las cuales descansa la posibilidad de reserva de información, por lo que dentro la información que generen, posean o administren los Sujetos Obligados, se considerará reservada cuando **compromete la seguridad pública**, además de que pone en **riesgo la vida, la seguridad o la salud de una persona física**, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

En el caso en particular, es necesario limitar la publicación de la información solicitada, ya que podría poner en riesgo la seguridad pública, sin soslayar que la misma tiene el carácter de **RESERVADA** por disposición expresa del artículo 110, en relación directa con la fracción II, del artículo 5, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, debido a que su difusión, facilitaría a células delictivas el neutralizar las acciones, implementadas o por implementar, en materia de seguridad pública para la preservación del orden y la paz pública, preceptos legales que a la letra señalan:

***Artículo 5.-*** *Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:*

***II. Bases de Datos:******Las bases de datos que constituyen subconjuntos sistematizados de la información contenida en Registros Nacionales en materias relativas a detenciones, armamento, equipo y personal de seguridad pública****, medidas cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada, así como las bases de datos del Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno relativas a la información criminalística, huellas dactilares de personas sujetas a un proceso o investigación penal, teléfonos celulares, personas sentenciadas y servicios de seguridad privada, así como las demás necesarias para la prevención, investigación y persecución de los delitos. El conjunto de bases de datos conformará el Sistema Nacional de Información;*

***Artículo 110.-*** *Los integrantes del Sistema están obligados a permitir la interconexión de sus Bases de Datos para compartir la información sobre Seguridad Pública con el Sistema Nacional de Información, en los términos de esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables. Para efecto de dar cumplimiento al párrafo anterior, se adoptarán los mecanismos tecnológicos necesarios para la interconexión en tiempo real y respaldo de la información.*

*La información contenida en las Bases de Datos del Sistema Nacional de Información, podrá ser certificada por la autoridad respectiva y tendrá el valor probatorio que las disposiciones legales determinen.*

***Se clasifica como reservada la información contenida en todas y cada una de las Bases de Datos del Sistema Nacional de Información, así como los Registros Nacionales y la información contenida en ellos, en materia de*** *detenciones, información criminal, personal de seguridad pública, personal y equipo de los servicios de seguridad privada,* ***armamento y equipo,*** *vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, medidas cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada, sentenciados y las demás necesarias para la operación del Sistema.*

Es por ello que se advierte que la información solicitada debe ser clasificada como reservada de conformidad con lo establecido en el artículo 113, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, numeral vigésimo cuarto, fracción II, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, así como los artículos 91, 128, 129, 140, fracción V, numeral I y 141, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, preceptos legales que a la letra establecen:

***Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública***

***Artículo 113.*** *Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:*

***I.*** *Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;*

***II.*** *Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales;*

***III.*** *Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional;*

***IV.*** *Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero del país, pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector público federal;*

***V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;***

***VI.*** *Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones;*

***VII.*** *Obstruya la prevención o persecución de los delitos;*

***VIII.*** *La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;****IX.*** *Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa;*

***X.*** *Afecte los derechos del debido proceso;*

***XI.*** *Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;*

***XII.*** *Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y*

***XIII.*** *Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.*

***Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información***

***Vigésimo cuarto.*** *De conformidad con el artículo 113, fracción VI de la Ley General, podrá considerarse como reservada, aquella información que obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes, cuando se actualicen los siguientes elementos:*

***I.*** *La existencia de un procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes;*

***II.*** *Que el procedimiento se encuentre en trámite;*

***III.*** *La vinculación directa con las actividades que realiza la autoridad en el procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes, y*

***IV.*** *Que la difusión de la información impida u obstaculice las actividades de inspección, supervisión o vigilancia que realicen las autoridades en el procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes.*

***Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.***

***Artículo 91.*** *El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando ésta sea clasificada como reservada o confidencial.*

***Artículo 128.*** *En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión.*

*Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño.*

*Tratándose de aquélla información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva.*

***Artículo 129.*** *En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, justificando que:*

***I.*** *La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable del perjuicio significativo al interés público o a la seguridad pública;*

***II.*** *El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda; y*

***III.*** *La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.*

***Artículo 140.*** *El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando por razones de interés público, ésta sea clasificada como reservada, conforme a los criterios siguientes:*

***I. Comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;***

***II.*** *Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales;*

***III.*** *Se entregue a la Entidad expresamente con ese carácter o el de confidencialidad por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional;*

***IV. Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de una persona física;***

***V.*** *Aquella cuya divulgación obstruya o pueda causar un serio perjuicio a:*

***1.*** *Las actividades de fiscalización, verificación, inspección, comprobación y auditoría sobre el cumplimiento de las Leyes; o*

***2.*** *La recaudación de las contribuciones.*

*VI. Pueda causar daño u obstruya la prevención o persecución de los delitos, altere el proceso de investigación de las carpetas de investigación, afecte o vulnere la conducción o los derechos del debido proceso en los procedimientos judiciales o administrativos, incluidos los de quejas, denuncias, inconformidades, responsabilidades administrativas y resarcitorias en tanto no hayan quedado firmes o afecte la administración de justicia o la seguridad de un denunciante, querellante o testigo, así como sus familias, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;*

***VII.*** *La que contengan las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;*

***VIII.*** *Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan quedado firmes;*

***IX.*** *Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la Ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público;*

***X.*** *El daño que pueda producirse con la publicación de la información sea mayor que el interés público de conocer la información de referencia, siempre que esté directamente relacionado con procesos o procedimientos administrativos o judiciales que no hayan quedado firmes;*

*Cuando se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización, siempre que esté directamente relacionado con procesos o procedimientos administrativos o judiciales que no hayan quedado firmes; y*

***XI.*** *Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.*

***Artículo 141.*** *Las causales de reserva previstas en este Capítulo se deberán fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en el presente Título.*

Cabe precisar que la clasificación es un acto administrativo mediante el cual se restringe el derecho de acceso a la información, mediante el cual los **Sujetos Obligados** determinan que la información requerida actualiza alguno de los supuestos de confidencialidad **o reserva,** de acuerdo con las bases y los principios inmersos en la normatividad aplicable.

Por lo que para realizar la reserva de la información no basta con exponer alguna de las causales previstas en la Ley de Transparencia local, en sentido contrario dicha valoración debe de realizarse a través de la ***“prueba de daño”*** que consiste en exponer los argumentos y razones, basados en elementos objetivos o verificables, a partir de los cuales se derive que la divulgación de información, en particular, puede afectar, poner en riesgo o dañar el interés protegido.

En consecuencia, el **Sujeto Obligado**, deberá realizar la prueba de daño y precisar las razones por las cuales la apertura de la información generaría una afectación, para ello referir que su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable, además establecer que el perjuicio supera de momento el interés público general que pudiera existir sobre la información requerida; pues, podría comprometer las tareas de seguridad pública e incluso poner en, riesgo la vida, la seguridad o la salud de una persona física.

En este punto es importante resaltar que los sujetos obligados son los que cuentan con la atribución exclusiva de analizar y ponderar si la información que poseen actualiza alguna de las hipótesis previstas en las fracciones citadas, mediante la aplicación, caso por caso de la **prueba de daño**. Esto en apego a lo dispuesto en los artículos 3 fracción XXXIII, 128, 129, 130 y 131 de la Ley de Transparencia local, como se observa a continuación:

***Artículo 3.*** *Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

*(…)*

***XXXIII.******Prueba de Daño:******Responsabilidad de los sujetos obligados de demostrar de manera fundada y motivada que la divulgación de información lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley****, y que el menoscabo o daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla y por consiguiente debe clasificarse como reservada;*

***Artículo 128.*** *En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión.*

*Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además,* ***el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño****.*

*Tratándose de aquélla información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva.*

***Artículo 129****.* ***En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación****, justificando que:*

1. *La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable del perjuicio significativo al interés público o a la seguridad pública;*
2. *El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda; y*
3. *La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.*

***Artículo 130. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las excepciones al derecho de acceso a la información y sólo podrán invocarlas cuando acrediten su procedencia****, sin ampliar las excepciones o supuestos de reserva o confidencialidad previstos en la Ley General y la presente Ley, aduciendo analogía o mayoría de razón.*

***Artículo 131. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de clasificación previstos en esta Ley corresponderá a los sujetos obligados****; en tal caso deberá fundar y motivar debidamente la clasificación de la información, de conformidad con lo previsto en la presente Ley.*

Del mismo modo, los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas establecen con relación al a prueba de daño lo siguiente:

***Prueba de daño:******La argumentación fundada y motivada que deben realizar los sujetos obligados tendiente a acreditar que la divulgación de información lesiona el interés jurídicamente protegido por la normativa aplicable*** *y que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla; (…)*

Asimismo, el Poder Judicial de la Federación emitió las tesis con número de registro 2011541[[2]](#footnote-2) y 2018460[[3]](#footnote-3) en las que, respectivamente, se dispone lo siguiente:

***ACCESO A LA INFORMACIÓN. EJERCICIO DEL DERECHO RELATIVO TRATÁNDOSE DE LA CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL, MEDIANTE LA PRUEBA DE DAÑO O DEL INTERÉS PÚBLICO Y ROL DEL JUEZ DE AMPARO PARA FACILITAR LA DEFENSA DE LAS PARTES.***

*Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece la existencia de los mecanismos correspondientes y de procedimientos de revisión expeditos, y dispone que ese derecho humano comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Asimismo, que toda la generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona. Además señala, como regla general, el acceso a dicha información y, por excepción, la clasificación. Es así que para clasificar la información como reservada, debe hacerse un análisis, caso por caso, mediante la aplicación de la "prueba de daño". Sin perjuicio de lo anterior****, cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obligados deberán elaborar una versión pública, en la que testen única y exclusivamente aquéllas, con indicación de su contenido de forma genérica, así como la fundamentación y motivación que sustente dicha clasificación****. Por otra parte, si alguien intenta revertir determinada clasificación de información que estima no es confidencial, debe plantearlo ante la autoridad que realizó la clasificación, dando audiencia a los beneficiados con la decretada y a los probables afectados, para el evento de que se reclasifique, a través de la "prueba del interés público". De lo anterior* ***se advierte que corresponde a los sujetos obligados realizar la clasificación de la información que obre en su poder*** *y, contra la decisión que adopten, procede interponer el recurso de revisión ante el organismo garante que corresponda. En consecuencia,* ***la obligación de clasificar la información corresponde única y directamente a los sujetos obligado****s, en tanto que al Juez de amparo sólo compete facilitar, bajo su más estricta responsabilidad, el acceso a la que sea "indispensable para la adecuada defensa de las partes".*

***PRUEBA DE DAÑO EN LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SU VALIDEZ NO DEPENDE DE LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE EL SUJETO OBLIGADO APORTE.***

*De acuerdo con el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con los lineamientos segundo, fracción XIII y trigésimo tercero, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, aprobados por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016,* ***la prueba de daño es la argumentación fundada y motivada que deben realizar los sujetos obligados para acreditar que la divulgación de la información lesiona un interés jurídicamente protegido y que el daño que puede producir es mayor que el interés de conocer ésta****. Para tal efecto, disponen que en la clasificación de la información pública (como reservada o confidencial), debe justificarse que su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional; que ese riesgo supera el interés público general de que se difunda; y, que la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. Así,* ***la prueba de daño establece líneas argumentativas mínimas que deben cursarse, a fin de constatar que la publicidad de la información solicitada no ocasionaría un daño a un interés jurídicamente protegido, ya sea de índole estatal o particular.*** *Por tanto, al tratarse de un aspecto constreñido al ámbito argumentativo, la validez de la prueba de daño no depende de los medios de prueba que el sujeto obligado aporte, sino de la solidez del juicio de ponderación que se efectúe en los términos señalados.*

Por lo tanto, con base en el estudio a lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y a los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales que corresponde a los sujetos obligados realizar la clasificación de la información que obre en su poder y **que la obligación de clasificar la información corresponde única y directamente a los sujetos obligados, mediante la formación de la prueba de daño**.

De lo argumentado anteriormente se desprende que los sujetos obligados al ser quienes generan, poseen o administran la información en uso de sus atribuciones de derecho público, son a quienes corresponde exclusivamente realizar la aplicación de la prueba de daño a la información que obra en sus archivos, y, mediante su realización, aportar los argumentos necesarios para demostrar fehacientemente que la divulgación de la información provoca un daño a un interés jurídicamente protegido.

Atento a lo anterior, el **Sujeto Obligado**, deberá realizar la prueba de daño y precisar las razones por las cuales la apertura de la información generaría una afectación, para ello referir que su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable, además establecer que el perjuicio supera de momento el interés público general que pudiera existir sobre la información requerida; pues, podría obstruir las actividades de investigación desempeñadas por la Dirección General de Seguridad y Protección, riesgo la vida, la seguridad o la salud de una persona física, así como causar daño u obstruya la prevención o persecución de los delitos, altere el proceso de investigación de las carpetas de investigación, afecte o vulnere la conducción o los derechos del debido proceso en los procedimientos judiciales.

Ahora bien, para aplicar la prueba de daño, se deberán de precisar las razones objetivas por las que la apertura genera una afectación, acreditando que:

* La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable del perjuicio significativo al interés público o a la seguridad pública;
* El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda; y
* La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

Sobre el primer supuesto consideremos que según el diccionario del español jurídico, por riesgo podemos entender “la contingencia o proximidad de un daño”,[[4]](#footnote-4) mientras que el daño es considerado como un “perjuicio o lesión”[[5]](#footnote-5), mientras que según el Diccionario de la Lengua Española, lo real es lo “(q)ue tiene existencia objetiva”,[[6]](#footnote-6) mientras que lo demostrables es, según la misma fuente, aquello que se puede demostrar,[[7]](#footnote-7)es decir, m)anifestar, declarar. Probar, sirviéndose de cualquier género de demostración, [enseñar](http://dle.rae.es/?id=FdI00Or#6nAyKjE) mostrar o exponer algo)”.[[8]](#footnote-8) Mientras que lo identificable es lo que puede ser identificado,[[9]](#footnote-9) esto es,  “(d)ar los datos necesarios para ser reconocido”.[[10]](#footnote-10)

Por lo que entonces, el primer supuesto de la prueba de daño consiste en acreditar que la entrega de la información provoca tres aspectos concurrentes: 1) la contingencia o proximidad de un daño, un perjuicio o lesión que tiene existencia objetiva, que se puede manifestar, declarar o probar mediante cualquier género de demostración a partir de proporcionar datos necesarios para reconocer el daño, perjuicio o lesión que provocaría a un interés público o a la seguridad pública.

Identificado ese riesgo, se debe demostrar que el mismo supera el interés público general porque se difunda dicha información.

Y, por último, que la limitación es acorde con el principio de proporcionalidad, para ello, se sugiere emplear los tres juicios propuestos por la Corte Constitucional Colombiana[[11]](#footnote-11), siguiendo el principio de ponderación propuesto por el Tribunal Constitucional Alemán,[[12]](#footnote-12) el juicio de idoneidad, que la medida adoptada sea la idónea para el ejercicio del derecho; de necesidad, que sea necearía para que el derecho que prevalece se ejerza y el de estricta proporcionalidad esto es, que el derecho que prevalezca sea en la dimensión estrictamente proporcional al derecho que retrocede.

Es así como, al configurarse tales requisitos, se otorga certidumbre jurídica y se protege la esfera más íntima del derecho humano constitucional y convencionalmente reconocido.

Los acuerdos de reserva deberán de cumplir con los siguientes parámetros de forma y fondo:

1. Número de folio de la solicitud
2. Referencia de la información solicitada
3. Causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, vinculándola con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter de información reservada.
4. Fundamento y Motivación Legal.
5. Conexión entre los fundamentos y motivos que dieron origen a la Reserva de la información.

**Prueba de Daño**

1. Riesgo real, demostrable e identificable (Modo, Tiempo y lugar)
2. Temporalidad de la Reserva de la Información
3. Autoridades competentes.

Bajo este contexto, se arriba a la premisa de que la normatividad aplicable reconoce y enlista de manera restrictiva diversos supuestos encauzados a clasificar la información como reservada, englobando la relativa a procedimientos administrativos o judiciales.

Debido a lo anterior, se arriba a la premisa de que, frente a la colisión de derechos fundamentales, se debe de recurrir al criterio de proporcionalidad, ponderando los elementos o principios siguientes:

1. **Idoneidad:** Existe un inminente interés público y colectivo de conocer la documentación que contiene el conflicto por límites territoriales entre los municipios de Tepotzotlán y Teoloyucan, lo anterior al tomar en consideración que propicia a la transparencia, rendición de cuentas e incluso a la gestión pública.
2. **Necesidad:** No existe un medio menos oneroso para lograr el fin constitucionalmente valido, el derecho de acceso a la información es la única vía para que cualquier ciudadano pueda acceder a expedientes o anexos de conflictos territoriales.
3. **Proporcionalidad:** La difusión de la información conduce a mayores efectos positivos para la sociedad y una afectación menor en el bien jurídico de la secrecía, favoreciendo a los intereses de la ciudadanía.

Ahora bien, respecto a la ***TEMPORALIDAD*** de ***RESERVA*** de la información, es de señalar que el artículo 125, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y en el artículo 101, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, contemplan que la información clasificada como reservada, podrá permanecer con tal carácter **hasta por un periodo de cinco años, contados a partir de su clasificación**, salvo que antes del cumplimiento del periodo de restricción, dejaran de existir los motivos de su reserva.

Con base en lo anteriormente expuesto, resulta procedente ordenar la entrega de la siguiente información:

* Acuerdo que emita el Comité de Transparencia por el cual se clasifique como reservado el pronunciamiento del Sujeto Obligado respecto de la persona referida en la solicitud.

En mérito de lo expuesto en líneas anteriores, resultan fundados los motivos de inconformidad vertidos por **El Recurrente**, por ello con fundamento en la *segunda hipótesis* del artículo 186, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se **MODIFICA** la respuesta a la solicitud de información número **00321/FGJ/IP/2024** que ha sido materia del presente fallo.

Por lo antes expuesto y fundado es de resolverse y,

**SE RESUELVE**

**PRIMERO**. Se **MODIFICA** la respuesta del **Sujeto Obligado** a la solicitud de acceso a la información pública **00321/FGJ/IP/2024**,por resultar parcialmente **fundados** los motivos de inconformidad vertidos por la parte **Recurrente**, en términos del considerando **CUARTO** de la presente Resolución.

**SEGUNDO.** Se **ORDENA** al **Sujeto Obligado,** haga entrega a la parte **Recurrente**, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (**SAIMEX**), de lo siguiente:

* + - 1. Acuerdo que emita el Comité de Transparencia dedidamente fundado y motivado, por el cual se clasifique como reservado el pronunciamiento del Sujeto Obligado respecto de la persona referida en la solicitud.

**TERCERO.** **NOTIFÍQUESE** a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), la presente Resolución al Titular de la Unidad de Transparencia del **Sujeto Obligado**, para que conforme al artículo 186 último párrafo, 189 segundo párrafo y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de diez días hábiles, e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente y, **se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III; 214, 215 y 216 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.**

**CUARTO.** De conformidad con el artículo 198 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de considerarlo procedente, el **Sujeto Obligado** de manera fundada y motivada, podrá solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de la presente resolución.

**QUINTO. Notifíquese** a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense **(SAIMEX),** al **Recurrente** la presente resolución, así como, que de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, y con lo establecido en los artículos 159 y 160 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública podrá impugnarla vía recurso de inconformidad ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, o bien, vía Juicio de Amparo en los términos de las leyes aplicables.

ASÍ LO RESUELVE, POR MAYORÍA DE VOTOS EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS, MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA, SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ, LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA (EMITIENDO VOTO DISIDENTE) Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA, EN LA VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO, ALEXIS TAPIA RAMÍREZ. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JMV/CCR/LMST

1. ***IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.***

*Del examen de compatibilidad de los artículos**73 y 74 de la Ley de Amparo**con el artículo**25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos****no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo,*** *en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías.* [↑](#footnote-ref-1)
2. Tesis [A.]: I.1º.A.E.133 A, T.C.C., *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, libro 29, tomo III, abril de 2016, p. 2133. [↑](#footnote-ref-2)
3. Tesis [A.]: I.10º.A.79 A, T.C.C., *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, libro 60, tomo III, noviembre de 2018, p. 2318. [↑](#footnote-ref-3)
4. <http://dej.rae.es/#/entry-id/E216930> [↑](#footnote-ref-4)
5. <http://dej.rae.es/#/entry-id/E87450> [↑](#footnote-ref-5)
6. <http://dle.rae.es/?id=VGqyuLj|VGtxgAo|VGuc9Wg> [↑](#footnote-ref-6)
7. <http://dle.rae.es/?id=CAjNzMR> [↑](#footnote-ref-7)
8. <http://dle.rae.es/?id=CAqWkEB> [↑](#footnote-ref-8)
9. <http://dle.rae.es/?id=KtnHLLd> [↑](#footnote-ref-9)
10. <http://dle.rae.es/?id=KtpfgjV> [↑](#footnote-ref-10)
11. “En las sentencias C-093 de 2001 y C-671 de 2001, se explicó el alcance de este tipo de escrutinio, denominado test integrado de igualdad: "[a] fin de determinar si el trato discriminatorio vulnera el derecho fundamental a la igualdad, la Corte ha elaborado un modelo de análisis que integra el juicio de proporcionalidad y el test de igualdad. Lo que en este modelo se hace, básicamente, es retomar y armonizar los elementos del test o juicio de proporcionalidad europeo con los aportes de la tendencia estadounidense. Así, se emplean las etapas metodológicas del test europeo, que comprende las siguientes fases de análisis: (i) se examina si la medida es o no adecuada, es decir, si constituye o no un medio idóneo para alcanzar un fin constitucionalmente válido; (ii) se analiza si el trato diferente es o no necesario o indispensable; y (iii) se realiza un análisis de proporcionalidad en estricto sentido, para determinar si el trato desigual no sacrifica valores y principios constitucionales que tengan mayor relevancia que los alcanzados con la medida diferencia. De otra parte, se toman los distintos niveles de intensidad en la aplicación de los escrutinios o tests de igualdad. Dichos niveles pueden variar entre (i) estricto, en el cual el trato diferente debe constituir una medida necesaria para alcanzar un objetivo constitucionalmente imperioso; (ii) intermedio, es aquel en el cual el fin debe ser importante constitucionalmente y el medio debe ser altamente conducente para lograr el fin propuesto; y (iii) flexible o de mera razonabilidad, es decir que es suficiente con que la medida sea potencialmente adecuada para alcanzar un propósito que no esté prohibido por el ordenamiento. Lo anterior debe tener aplicación, según el carácter de la disposición legislativa o la medida administrativa atacada". El test integrado fue aplicado en un caso de discriminación por VIH en la sentencia T-376 de 2013.” Citado en Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Gonzales Lluy y otros contra Ecuador. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia del 01 de septiembre de 2015. Párr. 256.   [↑](#footnote-ref-11)
12. Tribunal Constitucional Alemán. Resolución sobre los soldados son asesinos, de 10 de octubre de 1995 (BVerfGE 93, 266). En ALÁEZ CORRAL, Benito y ÁLVAREZ ÁLVAREZ, Leonardo. Las decisiones básicas del Tribunal Constitucional Federal Alemán en las encrucijadas del cambio de milenio. Ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y boletín oficial del Estado, Madrid, 2008. Pp. 1045-1096. [↑](#footnote-ref-12)